



PROGRAMAS DE GOBIERNO SIN RESPONSABILIDADES SOCIOAMBIENTALES

**Llamado a la población boliviana a exigir propuestas
electorales responsables y sostenibles**

Junio 2025

RESUMEN

Los programas de gobierno presentados por los candidatos y partidos inscritos para las Elecciones Generales 2025, proponen medidas de ajuste macroeconómico y apuestan por economías extractivas, pero dicen poco o nada sobre los costos sociales y ambientales que conllevan las mismas.

Por un lado, los ajustes macroeconómicos tienen impactos sociales negativos, pudiendo agravar la pobreza, la desigualdad y el desempleo entre toda la población y en particular entre los grupos sociales más vulnerables. Existen experiencias dolorosas en nuestra reciente historia, como lo sucedido después de las reformas económicas implementadas a mediados de los 80.

Por otro lado, la intensificación de actividades extractivas exacerba los costos ambientales. Los incendios, la contaminación minera, los

pasivos ambientales de la explotación del litio son temas de gran preocupación para todos los bolivianos.

En este contexto, la Fundación TIERRA hace un llamado público a los candidatos y partidos políticos a enmarcar sus planes de gobierno bajo el paraguas de políticas sostenibles y directrices internacionales para prevenir y mitigar los riesgos sociales y ambientales.

Recomendaciones:

1. Ajustar los programas de gobierno incorporando el enfoque de políticas sostenibles.
2. Proponer ajustes macroeconómicos responsables y realistas.
3. Evitar la irresponsabilidad de no proponer ajustes macroeconómicos.
4. Sugerir economías ambientalmente sostenibles.

1. La ausencia de políticas sostenibles

Después de 20 años, las elecciones generales se realizarán en un contexto nacional fuertemente influenciado por la crisis económica. Las proyecciones de crecimiento para los próximos tres años giran en torno al 1% anual. Asimismo, las presiones inflacionarias siguen aumentando. La inflación acumulada de los primeros cinco meses del 2025 llegó al 9,81% y, según algunas estimaciones, estará en torno al 15,1% para el fin de año¹. Son señales de advertencia de que Bolivia está en puertas de un largo periodo de inflación y estancamiento, vale decir, de estanflación.

Por esta razón, lo económico se ha convertido en el centro de atención de las propuestas electorales. Prácticamente, todos los partidos políticos en carrera, sin que importe mucho sus orientaciones ideológicas, convergencias y divergencias, coinciden en varios planteamientos económicos, como la urgente necesidad de ajustes macroeconómicos, la creación de un fondo de estabilización mediante endeudamiento externo, la implementación de reformas económicas en sectores clave o estratégicos, la eliminación parcial o total de la subvención a los combustibles, y/o la flexibilización del tipo de cambio, entre otros. De manera paralela, distintas propuestas electorales coinciden en mantenerlo, incluso, profundizar las actividades extractivas como la ganadería y la agricultura

de exportación en el oriente boliviano, la explotación del litio en los salares y la minería, particularmente la del oro, en tierras altas y en la Amazonía boliviana.

Es decir, las soluciones que proponen se fundan en dos pilares: políticas de ajuste macroeconómico e intensificación de la economía extractiva. Ofrecen varias medidas específicas para estabilizar la economía, pero dicen muy poco o nada sobre los costos sociales que conllevan estas reformas macroeconómicas. De manera similar, planean impulsar y expandir las actividades extractivas, pero guardan silencio sobre los costos ambientales relacionados, como la devastación de los bosques por la agroindustria, la contaminación y explotación ilegal de áreas protegidas para la minería del oro o el uso masivo de agua para la extracción de litio.

Al ignorar los costos sociales y ambientales, las propuestas económicas forman parte de modelos de desarrollo insostenibles e irresponsables que pertenecen al pasado. Hoy en día, cualquier programa de gobierno debería estar enmarcado dentro de directrices y políticas sostenibles, no solo para la mitigación de los impactos negativos, sino porque Bolivia está obligada a cumplir compromisos internacionales en materia de responsabilidad social y ambiental².

1. *International Monetary Fund. Western Hemisphere Dept. "Bolivia: 2025 Article IV Consultation-Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for Bolivia", IMF Staff Country Reports 2025.* <https://doi.org/10.5089/9798229012669.002>

2. Naciones Unidas Bolivia. (2015). Objetivos de Desarrollo Sostenible en Bolivia. ONU Bolivia. <https://bolivia.un.org/es/sdgs>

2. Riesgos sociales y ambientales

Debemos recordarles a los candidatos y partidos políticos que se inclinan por las medidas de shock macroeconómico que existen experiencias aleccionadoras al respecto. Los ajustes estructurales de 1985 y años posteriores agravaron los problemas socioeconómicos, especialmente entre la población más vulnerable, porque, precisamente, no contemplaban medidas de compensación social. El desempleo fue masivo en el sector público, principalmente en la minería, y en el sector privado, especialmente en la manufactura. La pobreza aumentó drásticamente, al igual que la desigualdad, debido a que la liberalización de mercados y la eliminación de subsidios debilitaron severamente el poder adquisitivo de los ingresos de las familias bolivianas³. En consecuencia, los conflictos sociales y políticos también escalaron y acabaron por obstaculizar cambios posteriores.

Por eso, en años posteriores, se introdujeron medidas para paliar los costos sociales, mediante la creación del Fondo Social de Emergencia (FSE), el Fondo de Inversión Social (FIS) y las llamadas “reformas estructurales de segunda generación” para la descentralización y la participación popular⁴. El alivio de la deuda externa también fue parte de los esfuerzos internacionales de mitigación de los

costos sociales ocasionados por los ajustes de *shock*.

También debemos recordarles que la intensificación de la economía extractiva exacerba los costos ambientales, la pérdida de los recursos naturales y la crisis climática. Actualmente, Bolivia es el segundo país del mundo que más bosques primarios pierde al año a causa de la deforestación en las tierras bajas⁵. Los incendios forestales de 2024 alcanzaron una cifra récord de 12,6 millones de hectáreas quemadas, de las cuales el 68% se encuentra en el departamento de Santa Cruz. La deforestación, los desmontes y los incendios son la consecuencia directa de la flexibilización de la legislación agroambiental, impulsada por el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), en parte con el argumento de que los monocultivos evitarían la crisis económica, y en parte para utilizar la tierra y los bosques como moneda de pago a sus aliados políticos.

Con base en estimaciones preliminares de la base de datos global EDGAR⁶, los incendios de 2024 habrían liberado unas 100 megatoneladas de dióxido de carbono (CO₂) que, monetizadas a un precio de carbono conservador de 100 dólares

3. Banco Mundial. (2020). ¿Cómo reimpulsar la reducción de la pobreza y la desigualdad en Bolivia? Oportunidades para eliminar fuentes de vulnerabilidad y construir resiliencia. <https://goo.su/E7j9Bw>

4. Moreno, W. (2013). Actuales políticas de lucha contra la pobreza en América Latina Bogotá: Temis.

5. Global Forest Watch. (2025). Latest analysis on deforestation trends. Global Forest. <https://goo.su/fb7zNr>

6. Según datos del sistema de monitoreo EDGAR (Emissions Database for Global Atmospheric Research), en septiembre de 2024 se registró la emisión de 80 megatoneladas (Mt) de carbono derivadas de incendios forestales. Considerando que el 19% de la superficie afectada por incendios ocurrió en octubre (EDGAR, 2024), se proyecta que la cifra anual aproximada alcanzaría las 100 Mt de carbono emitidas.

por tonelada, equivalen a 1.000 millones de dólares⁷.

En términos monetarios, éste es el costo ambiental de los monocultivos de soya, a cambio de un beneficio económico de 1.065 millones de dólares en exportación (2024). Aunque el valor monetario del impacto ambiental es aproximado, revela que los costos externalizados igualan a los beneficios económicos. Esto significa que la agroindustria que planean impulsar las candidaturas tiene un severo problema de insostenibilidad ambiental.

También existen varios estudios que alertan sobre los impactos ambientales de la minería del oro. El uso generalizado del mercurio en la minería aurífera, especialmente en la artesanal y a pequeña escala, contamina ríos, ecosistemas frágiles y medios de vida de las poblaciones indígenas de las tierras bajas⁸. También hay un uso indiscriminado de metales pesados como el plomo y el arsénico. Los nexos políticos de los mineros cooperativistas con el gobierno nacional permiten la ocupación ilegal de áreas protegidas, la otorgación irregular de licencias ambientales y permisos de operación, además de la ausencia de trabajos de fiscalización sin interferencia política.

De manera similar, los riesgos potenciales del litio son altos, como la contaminación por residuos químicos, pérdidas de biodiversidad

e impactos negativos en los sistemas hídricos de los salares. Se estima que las plantas de Extracción Directa de Litio (EDL), promocionadas como las más eficientes en cuanto al uso de agua, podrían consumir hasta 10 millones de metros cúbicos de agua por año, lo que representa una amenaza real para las comunidades campesinas y los sistemas hídricos del altiplano sur. El problema de fondo es que Bolivia, a diferencia de Chile o Argentina, no cuenta con una normativa ambiental específica para la explotación de salmueras y los contratos con Uranium One (Rusia) y CBC (China) tampoco están respaldados por exhaustivas Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA).

3. La urgente necesidad de políticas sostenibles

Las políticas sostenibles son planes y medidas diseñadas para el desarrollo económico, social y ambiental, asegurando el bienestar social de las actuales y futuras generaciones y el uso responsable de los recursos naturales. Hoy en día, las políticas sostenibles son fundamentales para equilibrar las necesidades de reformas económicas y los costos sociales y ambientales. Temas como la pobreza, la desigualdad, el cambio climático, la contaminación o la pérdida de biodiversidad, son fundamentales e inevitables para cualquier programa de gobierno.

Como hemos explicado, las propuestas económicas de los candidatos y partidos políticos en carrera, no están diseñadas bajo el paraguas de políticas sostenibles. Por lo tanto, ignoran los riesgos sociales y ambientales, lo que puede tener graves consecuencias

7. Copernicus Atmosphere Monitoring Service. (2024). South America sees historic emissions during 2024 wildfire season. European Centre for Medium-Range Weather Forecasts. <https://goo.su/UGNHhiM>

8. Friedrich-Ebert-Stiftung. (2023). Minería aurífera: el mercurio en cuestión. La Paz. Bolivia.

en lo venidero. Si las candidaturas siguen subestimando la necesidad de balancear los beneficios y los costos, la implementación de sus propuestas podría incluso empeorar la actual crisis socioeconómica.

El siguiente cuadro sintetiza los principales desafíos sociales y ambientales emergentes de las propuestas económicas planteadas hasta ahora por los diferentes candidatos y partidos.

Necesidades de políticas sostenibles en las propuestas económicas

Pilares económicos	Principales propuestas	Costos sociales/ ambientales	Preguntas emergentes sin respuestas
Ajustes macroeconómicos de mediano o gran alcance (oposición)	Recorte de gasto público.	Desempleo. Recorte de asistencia social.	<ul style="list-style-type: none"> ¿Cuál es el impacto previsto en el desempleo? ¿Cuánto se agravará la pobreza y qué sectores poblacionales serán los más afectados? ¿Cómo afectará a los cuentapropistas o gremialistas?
	Tipo de cambio flexible / devaluación de la moneda nacional.	Pérdida de poder adquisitivo del boliviano. Alza del costo de vida.	<ul style="list-style-type: none"> ¿Qué mecanismos de protección social y mitigación se proponen para enfrentar la pérdida de poder adquisitivo? ¿Con qué fondos se financiarán estos mecanismos?
	Alza de precios de combustibles o eliminación de la subvención.	Aumento de tarifas de transporte público. Inflación con efectos multiplicadores sobre la canasta alimentaria y básica.	<ul style="list-style-type: none"> ¿Cómo se controlará el efecto multiplicador del incremento del precio de los combustibles? ¿Cómo impactarán estas medidas en la desigualdad social?
Ajustes macroeconómicos de menor alcance o sin cambios (oficialismo y bloques afines al MAS)	Gasto público financiado por deuda externa y deuda interna.	Riesgo eminente de colapso económico. Insostenibilidad fiscal del gasto social.	<ul style="list-style-type: none"> ¿En qué medida el gasto público tiene un efecto multiplicador positivo sobre el consumo y la inversión? ¿Frena o acelera el colapso económico? ¿Cómo se financiará este gasto público siendo Bolivia un país de alto riesgo?
	Tipo de cambio fijo.	Escasez de dólares. Devaluación de remesas. Precios especulativos.	<ul style="list-style-type: none"> ¿Cómo se apalancarán dólares sin reservas de oro? ¿Qué actividades productivas generarán las divisas que originaba la exportación de gas? ¿Cuál será el impacto de mantener el tipo de cambio fijo sobre la seguridad alimentaria? ¿Cuál será el costo para las familias que reciben las remesas?

Continúa en la siguiente página...

Pilares económicos	Principales propuestas	Costos sociales/ ambientales	Preguntas emergentes sin respuestas
Ajustes macroeconómicos de menor alcance o sin cambios (oficialismo y afines al MAS)	Congelamiento de precios de combustibles.	Desabastecimiento. Desempleo. Crisis de la economía informal.	<ul style="list-style-type: none"> • ¿La subvención universal a los combustibles es socialmente equitativa? ¿Es realmente sostenible en el tiempo? • ¿Cuáles serán los mecanismos de protección social en caso de desabastecimientos prolongados de combustible? ¿Existen planes de contingencia ante una crisis generalizada?
		Altas tasas de deforestación. Incendios forestales recurrentes, disminución de lluvias, incremento de temperaturas. Presión inflacionaria y ambiental por la libre exportación.	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Qué cambios normativos e institucionales se establecerán para lograr un uso racional de la tierra y los bosques en el país? • ¿Bolivia se sumará al compromiso de Deforestación Cero en la Amazonia impulsado por Brasil? • ¿Que ajustes normativos y de política publica plantean para disminuir la deforestacion? ¿Qué planteamientos se proponen para reducir los incendios forestales? ¿Cuáles son las metas de superficies con desmontes legales, quemas controladas y cambio de uso del suelo? • ¿Qué se propone para frenar los avasallamientos de tierra?
Intensificación de la economía extractiva	Minería del oro.	Contaminación de ríos con mercurio. Metales pesados. Destrucción de áreas protegidas y territorios indígenas.	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Qué políticas se implementarán para lograr una verdadera fiscalización de las actividades mineras? • ¿Se adoptarán regulaciones específicas como aranceles para la importación de mercurio o impuestos de compensación por pasivos ambientales? • ¿Se introducirán cambios en la legislación tributaria para mejorar las recaudaciones del sector aurífero? • ¿Qué medidas se plantea para defender y respetar las áreas protegidas y los territorios indígenas?
		Falta de Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA). Alteración de sistemas hídricos. Contaminación con desechos químicos Ausencia de consulta previa.	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Se aprobará una normativa ambiental específica para la explotación de salmueras? • ¿Se realizarán nuevas Evaluaciones de Impacto Ambiental? • ¿Se aprobarán los contratos Uranium One (Rusia) y CBC (China) en la Asamblea Legislativa? • ¿Se realizará procesos de consulta previa libre e informada ?

Fuente: Elaboración propia.

4. Importancia de metas concretas y medibles

Sabemos que los discursos políticos abundan en promesas sociales y ambientales, dando la sensación que sus propuestas económicas están acompañadas por medidas de protección y mitigación de los costos sociales y ambientales. Sin embargo, las palabras de los candidatos y partidos políticos son insuficientes para exigir responsabilidades socioambientales una vez que sean gobierno. Por eso, las políticas sostenibles no deben quedarse en discursos y palabras, sino deben ser compromisos con metas concretas, cuantificables y medibles. Para ello, existen varias herramientas y metodologías desarrolladas a nivel internacional que, además, permiten una rendición pública de cuentas mucho más efectiva y transparente.

Por ejemplo, en lo social, se debe explicitar las tasas de variación de la pobreza a causa de los ajustes macroeconómicos. Aunque es difícil de predecir las variaciones exactas, ello no impide la definición de parámetros o rangos de variación de las tasas mínimas y tasas máximas. De igual forma, se deben señalar explícitamente las medidas de mitigación, los presupuestos requeridos y las fuentes de financiamiento.

En lo ambiental, los costos ambientales de la agroindustria deberían estar cuantificados en hectáreas de deforestación permitida, número de autorizaciones de desmontes legales, número de hectáreas con permisos para quemas controladas, superficie autorizada para cambio del uso de suelo, entre otros. En cuanto a los incendios, si bien no es posible fijar metas medibles con

anticipación porque son impredecibles, se deben identificar claramente las reformas institucionales y las medidas de manejo integral del fuego.

5. Recomendaciones

Ajustar los programas de gobierno incorporando el enfoque de políticas sostenibles.

Las propuestas económicas, en especial, requieren ajustes para que sean socialmente responsables y ambientalmente sostenibles. La presentación oficial de los programas de gobierno al Tribunal Supremo Electoral (TSE) no impide a las candidaturas y partidos a hacer ajustes, precisar y mejorar sus propuestas.

Proponer ajustes macroeconómicos responsables y realistas.

En vista que la crisis económica es severa y los peligros de agravamiento son reales, las reformas macroeconómicas son necesarias e inevitables, pero también conllevan grandes riesgos socioeconómicos. No se pueden hacer ajustes macroeconómicos a cualquier costo social y ambiental o sin medir las consecuencias futuras. Las candidaturas y partidos políticos tienen que evaluar con seriedad, rigurosidad y responsabilidad el alcance y la profundidad de los ajustes que planean y tener como contrapeso los potenciales impactos negativos sobre las poblaciones vulnerables y el medioambiente. Las medidas de mitigación y protección social no pueden ser ignoradas como en los años 80.

Evitar la irresponsabilidad de no proponer ajustes macroeconómicos.

Las candidaturas cercanas al entorno del MAS están demasiado inclinadas por dar continuidad a las políticas económicas vigentes con el justificativo de

que es la mejor manera de proteger a las mayorías pobres y populares. Pero estas medidas son la causa de la crisis económica y no tienen viabilidad ni ningún sustento técnico para el futuro. Si las medidas vigentes siguen sin cambios, los costos sociales serán mucho mayores a los que pueden ocasionar las reformas macroeconómicas no deseadas pero necesarias. Por eso, los candidatos y partidos políticos de esta corriente deben comprometerse a hacerse cargo de las consecuencias del más que probable fracaso de sus promesas.

Proponer economías ambientalmente sostenibles. Aunque es sabido que los sectores extractivos seguirán teniendo un papel protagónico en la economía y las alternativas sostenibles seguirán siendo escasas, ello no justifica el abandono de los esfuerzos por transitar desde las propuestas economicistas que están en la mesa hacia alternativas sostenibles. Las medidas de control y mitigación de los costos ambientales son imprescindibles y estratégicas si queremos avanzar hacia el crecimiento económico con desarrollo sostenible en el mediano y largo plazo.



www.ftierra.org

**Oficina Nacional y
Regional Altiplano**

Calle Hermanos Manchego
N° 2566 - Zona Sopocachi
Teléfono: (591-2) 243 2263
WhatsApp: +591 64044808
Correo: tierra@ftierra.org
La Paz - Bolivia

Regional Valles

Avenida Jaime Mendoza
N° 2527
Zona San Matías
Teléfono: (591-4) 642 1332
Sucre - Bolivia

Regional Oriente

Calle Mato Grosso
N° 2302
entre 2do y 3er anillo
Santa Cruz - Bolivia